

Reportaje:

Las dos décadas de Diego de Almagro sin la construcción de una sola vivienda social

En una comuna que figura entre las que más recursos perciben por concepto de patentes mineras y royalty, más de 380 familias continúan viviendo sin acceso a servicios básicos y enfrentando problemas sanitarios graves.

Una vocera de los campamentos del cerro La Antena (acompañada de dirigentes que agrupan a Villa Latina y otros tres asentamientos) relata que la precariedad es evidente: "Estuvimos casi un año sin que el municipio viniera a limpiar los pozos sépticos. Estaban colapsados, con plagas de ratones y mosquitos. En mi desesperación denuncié a la municipalidad y a la Seremi de Salud. La respuesta fue desestimar el caso y culparnos, diciendo que nuestras calles estaban llenas de basura y que vivíamos rodeados de perros. Eso es falso y ofensivo", afirma, destacando que la comunidad mantiene un orden estricto y recolección de basura tres veces por semana.

Uno de los problemas que vivieron con preocupación, fue que los camiones aljibes que les suministran agua habrían estado operando sin resolución sanitaria, situación que llevaron incluso al municipio y que se abordó en varios consejos municipales. La respuesta de la autoridad a este medio indicó que

“Según los registros de esta institución, existe autorización sanitaria vigente otorgada al Municipio de Diego de Almagro para un Sistema de Distribución de Agua Potable Mediante el Uso de Camiones Aljibe, otorgada a través de la Resolución Exenta N° 19720/2021. Esta resolución de autorización sanitaria considera los vehículos con patente KXRR99 y BZHX82, para abastecer a los sectores Villa Stone, Villa Hay Vida en el Desierto, Villa 17 de Agosto, Villa Latina, Villa Esperanza, Población Los Héroes, Calle Waldo Iriarte y Las Parcelas, los cuales se encuentran contemplados en el plan regulador comunal de Diego de Almagro”.

Agregó la respuesta que “cabe señalar que el mencionado sistema de distribución de agua potable a través de camiones aljibe se encuentra incluido en la programación de fiscalización de esta Autoridad Sanitaria, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Asimismo, es informar preciso que, a la fecha, no se han recibido solicitudes ni denuncias ciudadanas relacionadas con el funcionamiento de este sistema que hayan motivado procesos de fiscalización adicionales por parte de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.”

Sin embargo, tanto para algunas autoridades municipales como para algunos dirigentes, esta respuesta no convence debido a que no informa periodicidad o fechas efectivas en que desde 2021 a la fecha los camiones hubiesen sido sanitizados.

Por otra parte, de todas las puertas que han debido tocar para poder gestionar mejoras en sus condiciones de vida, los dirigentes apuntan directamente al programa Campamentos Precarios del Serviu, al que acusan de actuar con “poca ética, nula humanidad y de fomentar divisiones internas”, debido a que “Inventan directrices, no vienen a catastrar desde hace dos años y cuando lo hacen, amenazan con desalojar a quienes no logran censar porque trabajan en horario hábil. Pareciera que quisieran sacarnos a todos. Nos ven como ignorantes, pero conocemos perfectamente nuestros derechos”, señalan.

A esto suman críticas por la parálisis que ha provocado el caso fundaciones, que mantiene bajo investigación el traspaso de recursos:

“Mientras estén en sumario, no pueden recibir fondos, y eso nos deja atrapados en un estamento que no puede hacer nada por nosotros, cubriendo la espalda de los que manejaron la plata”.

Por miedo a represalias, Diario Chañarillo ha optado por proteger la identidad de sus fuentes, quienes desde el inicio de esta investigación a la fecha han recibido una noticia que les genera cierta esperanza: la administración de estos asentamientos irregulares pasaría desde Campamentos Precarios (programa gubernamental de apoyo) a la Gobernación Regional.

La vocera afirma que este cambio podría abrir la puerta a mejoras reales.

“Es lo más maravilloso que nos han dicho. Ahora los Cores podrán intervenir y el municipio se hará cargo del territorio. Espero que sea para mejor, que se fiscalice como corresponde y que haya un ordenamiento real. Hemos pedido las actas para asegurarnos de que esto sea verdad”, comenta llena de esperanza ante esta nueva etapa de promesas, que podrían cerrar veinte años de postergación por una vivienda y condiciones dignas.

Durante este periodo, en que hemos entrevistado a más de 10 dirigentes, quienes relatan enfermedades, malos olores y postergación por parte de las autoridades regionales y municipales, también hemos consultado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a quienes compartimos una batería de 6 preguntas que nos permitieran entender los nudos que enfrenta la planificación y materialización de viviendas sociales en la comuna y sin embargo, a la fecha, no hemos recibido respuesta, debido a que según se nos señaló, dicha respuesta debe venir desde Santiago o a que la competencia corresponde al Serviu.

Consultado el Serviu a través de su departamento de prensa, se nos ha respondido que la encargada se encuentra en uso de días de permiso laboral, por lo que tampoco hemos podido conocer la versión de dicho servicio.

No obstante, todo lo anterior, el problema de fondo responde a una crisis estructural. La situación habitacional en Diego de Almagro arrastra más de dos décadas de rezago: desde 2004 no se construye una sola vivienda social. Esto ha generado un alza desmedida de arriendos y un aumento sostenido de tomas.

“Este pueblo está hecho para servir a la minería. Nadie quiere arrendarle a una familia si puede arrendarle a una contratista de Codelco. Tras el aluvión, muchos sacaron

a sus arrendatarios para recibir beneficios o arrendar al Estado. ¿Dónde iba a ir esa gente? A las tomas”, señala una de las dirigentes quien, reunida junto a otros, a través de una video llamada entrega su diagnóstico sobre el drama que viven en su territorio.

Las cifras oficiales confirman la magnitud del déficit habitacional. En la comuna de Diego de Almagro faltan 234 viviendas, según las cifras oficiales, que probablemente no alcanzan a contabilizar a los migrantes que aún no regularizan su estatus en el país; mientras que, a nivel regional, Atacama tiene un déficit que se estima entre 8.000 y 8.161 viviendas, según diversos informes de la Cámara Chilena de la Construcción. Las proyecciones a 2035 son aún más preocupantes: se calcula un déficit de 21.222 viviendas, al que se sumarán 36.858 nuevas necesidades derivadas de la formación de nuevos hogares.

Recientemente, las familias recibieron la noticia de la postación para la regularización del tendido eléctrico, gestión que proviene desde el municipio, y que abre una luz de esperanza a cientos de familia que más allá de correos institucionales y cifras, gobiernos de turno, viven en su día a día luchando por mejorar las condiciones de sus viviendas o la opción de acceder a una en una comuna que en contraparte concentra las siguientes inversiones: En el ámbito solar destacan proyectos como el Parque Diego de Almagro Sur de Colbún (US\$150 millones más US\$11 millones en baterías), el Parque Diego de Almagro de Enel Green Power (US\$60 millones) y el Complejo Fotovoltaico Malgarida de Acciona (US\$170 millones), que en conjunto superan los US\$380 millones en capacidad instalada y generación limpia.

A ello se suma la minería, donde el proyecto Rajo Inca de Codelco representa una inversión superior a US\$1.383 millones, a lo que se añade el futuro desarrollo de Santo Domingo de Capstone Copper, aún sin cifra definida. Este conjunto de iniciativas consolida a Diego de Almagro como un polo estratégico de inversión energética y minera en la Región de Atacama.

